

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO



Depósito Legal: TO - 1 - 1958

Franqueo Concertado: Núm. 45/2

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LA MANCHA**SECRETARÍA GENERAL****COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA****Resolución de insostenibilidad 42.404**

Por la presente le comunico que en su reunión de fecha 16 de noviembre de 2012, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Toledo ha dictado la siguiente resolución:

Con fecha 16 de julio de 2012 se recibió en esta Comisión, solicitud de asistencia jurídica gratuita presentada por Rosario Perea Pajuelo, con NIF número 11797292V, y domicilio en Ronda San Pedro, número 34, 45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo), para la presentación de un procedimiento desahucio falta pago, número de autos 644 de 2012, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Illescas.

El día 17 de julio de 2012, doña Ana María Sánchez Santana a través del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Toledo presenta escrito manifestando la insostenibilidad de la pretensión de Rosario Perea Pajuelo.

Esta Comisión tras el estudio del expediente y a la vista de los informes remitidos por el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Toledo el 11 de septiembre de 2012 y por la Fiscalía Provincial el 7 de noviembre de 2012, acuerda declarar la insostenibilidad de la pretensión deducida por Rosario Perea Pajuelo.

Esta resolución puede ser impugnada por escrito, de forma motivada, y sin necesidad de intervención de Letrado, en el plazo de cinco días hábiles (excluyendo del cómputo los festivos) desde su notificación o, en su defecto, desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante la Secretaría de esta Comisión, sita en esta Delegación del Gobierno, siendo en ese caso remitida para su resolución junto con todo el expediente correspondiente a la resolución impugnada, y una certificación de ésta, al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado, teniendo en cuenta que éstos pueden imponer a quien hubiera impugnado de manera temeraria o con abuso de derecho, una sanción pecuniaria de 30,00 a 300,00 euros (artículo 20 de la Ley 1 de 1996).

Toledo 4 de diciembre de 2012.—El Secretario, Francisco Javier Acitores Durán.

N.º I.-1693